

**JUZGADO PROVINCIAL DE PRIMERA INSTANCIA NRO.
DOS EN LO CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y DE MINERIA**

Río Gallegos (SANTA CRUZ)

SENTENCIA

TOMO: XLVII

REGISTRO: 12143

FOLIO: 15/23

Río Gallegos, 14 de febrero de 2018.-

AUTOS Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados "ASOCIACIÓN MINISTERIO HIJOS DEL ALTÍSIMO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRO S/ AMPARO, Expte. 18632/18, que tramitan ante esta Secretaría Nro. DOS, venidos a despacho para resolver, y;

RESULTANDO:

Que a fs. 142/159 se presenta la Dra. Monica Sandra Cortes, en el carácter de apoderada del Ministerio Hijos del Altísimo, quien dice es propietario del INSTITUTO CRISTIANO DE ENSEÑANZA PATAGÓNICO (en adelante ICEP), y dicen que vienen a promover la presente acción de amparo contra el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz.

Señalan promueven la acción de Amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y la ley 16.986, art. 15 de la Constitución Provincial y en el Art. 2º de la ley 1117 contra los actos u omisiones del Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y del Consejo Provincial de Educación que lesionan de manera arbitraria y manifiesta sus derechos individualizando el acto del Consejo

Provincial de Educación (CPE) denominado Acuerdo N° 67/2017, mediante el cual se le rechaza la solicitud de reconocimiento oficial y dispone la clausura del Instituto de Enseñanza Patagónica (I.C.E.P.) y se le intima a hacer entrega de la documentación oficial en un plazo de 48hs., ocasionándole un grave e irreparable perjuicio. Solicitan medida de no innovar, la inmediata suspensión del Acuerdo 67/2017, se deje sin efecto el mencionado Acuerdo, se otorgue reconocimiento definitivo al ICEP y restablezca la subvención estatal, cese de actos discriminatorio, respeto de principio de legalidad e igualdad y cese del hostigamiento.

Relata que el 21 de diciembre de 2017 la Dirección Provincial de Gestión Privada dejó pegada en la puerta de la Institución una copia del Acuerdo Nro. 067/17 por medio del cual el CPE rechazó la solicitud de reconocimiento oficial y dispuso la clausura del ICEP.

Explica que el CPE no dio cumplimiento al Acuerdo Nro. 185/97, marco normativo del Régimen de Reconocimiento de los Institutos de Enseñanza de Gestión Privada, donde establece -dice- que presentada la solicitud de reconocimiento de nuevos institutos y luego de cumplimentados los requerimientos establecidos en sus artículos 10, 11, 12 y 13, el CPE otorga la autorización de funcionamiento por una año prorrogable a dos.

Sigue argumentado:

Que esa autorización rige como máximo los primeros tres años, durante los cuales se supervisará el desarrollo del proyecto educativo y que, cumplido lo previsto en dicho artículo, en base al informe producido por la Dirección Provincial de Educación Privada se otorgará, si correspondiere, el reconocimiento.

Que la institución presentó la solicitud de reconocimiento en el año 2005, expediente Nro. 621.532-CPE-06 y recibió autorización para funcionar para el año 2007, con prórroga en el

2008.

Que nuevamente recibió autorización en el año 2009.

Que ya para el año 2010 el CPE debía emitir el reconocimiento definitivo a la Institución Educativa al ser el plazo máximo estipulado en la ley, sin embargo no se otorgó el mismo y se ejercieron actos dilatorios, obstructivos, de carácter doloso para no otorgar el reconocimiento definitivo hasta el día de la fecha.

Que luego de 10 años la Institución ha solicitado que cesarán en su ilegalidad y emitieran el reconocimiento definitivo, sin embargo estos no respondieron ni modificaron su actitud.

Que presentaron sucesivas notas en los años 2009, 2011 y 2014.

Que el Instituto -dice- recibió informes técnicos favorables en relación al reconocimiento definitivo, de parte de supervisores Zuñiga y Murúa, los que -agrega- fueron intencionalmente omitidos.

Que en el año 2017 elevó un pedido de autorización para abrir nuevas secciones debido a la creciente demanda de los padres, lo cual -dice- contó con el respaldo de los supervisores pedagógicos.

Que, sorpresivamente, el 3 de julio de 2017 la Directora Provincial de Educación de Gestión Privada, Prof. Roxana Zurita relevó de sus funciones al Supervisor Roberto Murúa y a la Supervisora Zuñiga, quienes habían dado los informes favorables antes reseñados. Dice que esta actuación denota una intencionalidad discriminatoria y persecutoria, toda vez que los supervisores solo fueron apartados de sus tareas respecto del ICEP.

Alega que el CPE ha orquestado una campaña de desprestigio hacia la institución con un latente odio religioso, amenazando a la institución, creando en toda la comunidad educativa

perteneciente al ICEP ansiedad, miedo e intimidación.

Describe una serie de antecedentes periodísticos.

Dice que se ha montado una falsa versión de que el ICEP negaba el acceso a Supervisores.

Agrega que, en cuanto a las irregularidades edilicias, niega tal circunstancia, remarcando que durante diez años no han tenido accidentes. Denuncia la existencia de otros establecimientos educativos con problemas edilicios.

Denuncia actividad discriminatoria en relación a otros establecimientos que han obtenido reconocimiento oficial de manera mucho más rápida.

Observa que se ha violado su derecho de defensa en tanto se le ha negado en forma sistemática el acceso al expte. Nro. 621-532-CPE-06.

Seguidamente niega los incumplimientos que imputa el CPE a la Institución.

Luego procede a desarrollar los fundamentos jurídicos, solicita medida cautelar de no innovar, ofrece pruebas y solicita se haga lugar a la demanda, con costas.

A fs. 166 se expide el Sr. Agente Fiscal en sentido favorable a la admisibilidad formal de la acción.

A fs. 168 se requiere informe al Estado de la Provincia de Santa Cruz y al Consejo Provincial de Educación.

A fs. 260 obra agregado el informe producido por el Dr. Fernando Pablo Tanarro en su carácter de Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz.

En primer lugar plantea falta de legitimación pasiva en la persona del Estado Provincial, en función del artículo 82 de la Constitución Provincial y la Ley 3305.

Luego se expide en relación a la inadmisibilidad formal

de la acción intentada.

En tal sentido, afirma que según el art. 196 de la ley 3305 los acuerdos que dicte el CPE agotarán la vía administrativa y abrirán la instancia contencioso administrativa, no configurándose -agrega- ninguna situación que permita eludir la misma.

Sigue argumentando:

Que el amparo constituye un remedio excepcional, y que no corresponde el mismo cuando la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de prueba y debate.

Que el Acuerdo 67/2017 del CPE trata y evalúa cuestiones técnicas complejas, que lleva más de diez años de tramitación, con escasa actividad desplegada por la amparista, pretendiendo ahora lograr obtener el reconocimiento definitivo de la institución mediante una medida cautelar y un amparo.

En cuanto a la cuestión de fondo, la Fiscalía de Estado dice:

Que se trata de una confusa pretensión actoral que alega la existencia de una persecución religiosa o ideológica, y que la amparista pretende que sea V.S. quien violentado el ordenamiento constitucional otorgue al ICEP el reconocimiento definitivo que no ha podido lograr por no cumplimentar los requisitos establecidos por las normas vigentes conforme lo establece el acuerdo 67/2017 durante más de diez años.

Que si son ciertas las afirmaciones de la actora no se explicaría por que no siguió la vía administrativa pertinente ni utilizó antes la vía del amparo o contencioso administrativa.

Niega la ilegalidad o arbitrariedad del acuerdo Nro. 67/2017.

Que se encuentran cumplidos los recaudos que hacen a su legalidad, ha sido dictado por autoridad competente con atribuciones

suficientes, se encuentra motivado y se han respetado las normas del debido proceso.

Que de los considerandos del acuerdo surgen claramente las irregularidades del establecimiento educativo ICEP referentes a estructura edilicia, seguridad y habitabilidad que no cumplen con lo exigido en el Acuerdo 185/97 y que significan la existencia de riesgos a la integridad física de los alumnos.

Que allí también se alude a la apertura de secciones por parte del ICEP sin la debida autorización de CPE, agravándose aun más el riesgo al que ya estaban expuestos los menores y denotando la conducta evasiva e ilegal de las autoridades del CPE.

Alega, luego, contra la procedencia de la medida cautelar.

Invoca derecho, plantea inconstitucionalidad del art. 37 inc. 3 de la Ley Orgánica de la Justicia.

Por su parte, a fs. 273 se encuentra agregado el informe producido por la Sra. María Cecilia Velazquez en su carácter de Presidenta del Consejo Provincial de Educación.

Luego de adherir a los argumentos que expuso la Fiscalía en relación a la improcedencia formal del amparo, procede a argumentar del siguiente modo:

Que se trata de un acto administrativo autosuficiente que ha desarrollado punto por punto cuáles han sido los requisitos que la amparista ha dejado de cumplimentar durante doce años pretendiendo adquirir un derecho por el transcurso del tiempo.

Que el control ejercido por el CPE implica el constante acatamiento de las normas.

Que el Instituto no ha cumplido cuestiones básicas como un plano Municipal aprobado y que por un yerro de la autoridad a cargo al momento de la autorización provisoria la situación ha arrojado

como lamentable resultado el que la irregularidad se haya prolongado en el tiempo implicando un peligro para los educandos.

Que la autorización no debió ser otorgada desde el inicio.

Que yerra la amparista cuando habla de derecho adquirido, pues ello significaría convalidar incumplimiento de las normas en clara discriminación de aquellos que sí cumplimentan los requisitos y significar que los actos mal realizados por el Estado implican la posibilidad que otros se amparen en ellos para exigir igual trato. Que ello implicaría la imposibilidad de retrotraer o subsanar actos mal otorgados por la administración.

Que el acuerdo 067/2017 no fue impugnado administrativamente.

Que mediante el Expediente 621.532/06 se inicia el reconocimiento del Instituto de Enseñanza Patagónico pertenecientes al Ministerio "Hijos del Altísimo", quien presuntamente habría adjuntado los requisitos del artículo 10° del Acuerdo 185/97 relativo al otorgamiento del reconocimiento oficial y previo a ello el inicio de la matriculación. "...Pasando revista a los mismos, surge que no cumplimenta mucho de ellos o bien durante el discurrir de los años ha hecho sistemáticamente caso omiso a cumplimentar los requisitos que son exigibles o bien obligaciones impuestas por la misma..."

Que "luego se ha otorgado prorrogado la autorización de funcionamiento expresando en los considerandos de los actos administrativos que la actora ha cumplimentado con los requisitos del artículo 10°, todo lo cual es erróneo PUESTO QUE A LA FECHA TALES REQUISITOS NO SE CUMPLIMENTARON Y DEBIERON HABER ESTADO VERIFICADOS en el momento en que el Consejo procedió a expedirse en el primer ACUERDO, a saber N° 506/06. Por ello el yerro se replicó durante ese tiempo a esta parte lo cual no torna a

un plano sin aprobar como aprobado, así como no subsana las demás falencias reseñadas exhaustivamente en el acto administrativo....

Que -continúa el CPE- se ha procedido a revisar el mencionado expediente y a ordenar nueva inspección, "...la cual no pudo ser realizada a cuyos efectos se ordena una nueva visita contando con un escribano que certificó la negativa a ingresar a la institución y luego se incoa denuncia penal a fin de dejar debida constancia de la obstrucción aludida".

Que "...luego en fecha 05 de diciembre de 2017 la división de Bomberos de la Provincia pudo constatar un principio de incendio habiendo sido en un primer momento impedido el acceso del aludido personal a las instalaciones y luego fue negado a las autoridades del Consejo que se hicieron presentes".

Que por cédula 0607300041 "...se intima a la apoderada a remitir, entre otros, los planos aprobados por la municipalidad local (incumpliendo del artículo 10 inciso i del acuerdo 185/97) y readecuar las condiciones edilicias en de acuerdo al informe de la Dirección Provincial de Arquitectura Escolar Nota N° 442/17 (...) así como remitir la matrícula de alumnos".

Que "...la representación legal alude imposibilidad económica sin negar la existencia de las deficiencias señaladas, siendo la viabilidad de la institución un requisito sine qua non para el otorgamiento del reconocimiento..."

Que, pese a ello, "...la apoderada del Instituto pretende proceder a la apertura de cinco nuevas salas (en total) a principio de 2017 para educación inicial debiendo haber remitido esta información luego del cierre de la matriculación (incumplimiento del artículo 12° del Acuerdo 185/97) y no obstante lo cual, el 07 de junio 2017 se pudo constatar que se habían abierto de hecho en flagrante indiferencia hacia la autorización requerida..."

Que se constató en auditoría del 4 y 6 de octubre de 2017 que de setenta secciones, treinta y ocho no cuentan con autorización (primario) y del nivel secundario cuatro de once tampoco poseen autorización.

Que "tales desmesuradas e ilícitas aperturas de secciones significan necesariamente la contratación de nuevos docentes y en mérito a ello surgen sustanciales inconsistencias en las rendiciones respecto de la finalidad de los aportes estatales remitiéndose ciento cincuenta y siete recibos pero consignando en los datos de Excel y archivos informáticos ciento veintiuno y ciento diez agentes respectivamente.

Que, "luego en razón del no cumplimiento de los requisitos solicitados y la imposibilidad de auditar la Institución, el Consejo de Educación procede a interrumpir el pago del aporte estatal que se realizaba a dicha institución mediante Resolución N° 1690/17 en uso de las facultades otorgadas por el artículo 127 de la ley 3305 y siendo a todas luces verificable los extremos OBJETIVOS que arrojan como resultado la interrupción aludida, a saber: la imposibilidad empírica de verificar las situaciones laborales dentro de la institución y ejercer el control contable y laboral que compete a la autoridad de aplicación a verse obstruido el acceso al establecimiento así como por no haber sido remitida la información pertinente por el instituto".

Que "...se ha constatado el funcionamiento de un denominado "anexo" en la calle Berutti y Lavalle, el cual nunca ha sido autorizado por el Consejo de Educación pues no ha sido denunciado por el instituto en absoluto. Esto llega a conocimiento del Consejo por nota remitida por el Consejo Deliberante de la Municipalidad local consultando por la efectiva existencia de habilitación, respecto de lo cual se le ha informado que tal edificio no se encuentra habilitado para el funcionamiento de un establecimiento educativo.."

Que se ha podido constatar que existen docentes que cumplen funciones en la institución y carecen de la debida inscripción.

Que la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz se presenta en dos ocasiones a fin de realizar las inspecciones de su competencia siendo impedida por parte del Instituto.

Que "las auditorias permanentes a las que faculta la Ley Provincial no son aquellas propias de la labor de un supervisor como pretende la actora (...) la auditoría per se que justifica la continuidad del beneficio del aporte estatal a la institución de gestión privada es facultad originaria del Consejo de Educación y puede ser delegada en quien la Presidente disponga.

Que "... el día 1° de diciembre del año 2017 padres del instituto denuncian actos vejatorios por parte del personal dependiente de la Institución o más bien, personal que no configura parte de la POF ni debió haber estado en contacto con los alumnos. Las autoridades o personal de la institución (...) de palpar y/o revisar a los niños y sus pertenencias por cuanto ello configura un acto lesivo de los derechos más personalísimos..."

Que el Director del Nivel Primario no negó las acciones sino que al contrario, aclaró que el "Equipo de promoción Social del Instituto Cristiano de Enseñanza Patagónico" no pertenecía al establecimiento sino a la iglesia, hecho aún más grave por cuanto personal ajeno al instituto no debe encontrarse en horario escolar dentro del establecimiento.

Que -sigue argumentando- que "...el acto concluye con un fundamento exhaustivo y pormenorizado, que el Instituto "carece de buen concepto y solvencia" (inciso 2 del artículo 20 del Acuerdo 185/97), desarrollo actividades contrarias a los principios establecidos en la Constitución Provincial (...), incumplió de forma reiterada y

dolosa las normas sobre matriculación, calificación, examen, promoción, otorgamiento de pases, certificados y diplomas, régimen disciplinario (inc. 5 del artículo 20 del Acuerdo 185/87(alteró el normal funcionamiento del Instituto (...) incumplió a las obligaciones que como depositario de la documentación oficial le compete (...) y desarrolló la actividad escolar en un edificio que carece de las condiciones apropiadas para el funcionamiento de un centro educativo..."

Luego expresa la autoridad que no le asiste derecho adquirido al amparista por el transcurso de más de tres años en el trámite. Se refiere a lo previsto en el Acuerdo 185/97. Que en todo caso el silencio de la administración se interpreta como una negativa. Que el archivo del expediente no genera estado alguno.

Que el amparista de haber considerado que los requisitos se encontraban cumplimentados pudo haber instado amparo por mora. "Sin embargo, curiosamente, desde la puesta en funcionamiento del instituto a esta parte lo ha solicitado recién a fs. 562 donde expresa que hubo reiterados pedidos del otorgamiento.." Que a la fecha no ha presentado recurso alguno ni administrativo ni judicial.

Que el rechazo del reconocimiento es el desenlace consecuencia lógica de una actitud omisiva y negligente.

Que, respecto de los informes de los supervisores, "...carecen en principio de facultades a los efectos de disponer unilateralmente la apertura de aulas sino que al contrario y habiendo habido en el caso de autos una apertura desmesurada de secciones que personal idónea y técnico se expresa respecto de la viabilidad de las mismas. El supervisor pertenece a un nivel -inicial, primario, secundario o superior - y configura un abuso de su función el pretender abrogarse prerrogativas que exceden ampliamente la expertise a la que se encuentra habilitado..."

Finalmente, contesta el apartado "Crítica concreta a las

razones que ofrece la administración". Luego invoca derecho, ofrece prueba y solicita el rechazo de la acción de amparo.

A fs. 284 se realiza audiencia entre las partes, acto en el que ratifican en los esencial las posturas de los escritos liminares.

A fs. 313 se recusa con causa al Dra. Marcelo Bersanelli, plantea la nulidad del informe, contesta traslado del planteo de falta de legitimación pasiva efectuado por la Fiscalía, ofrece pruebas.

A fs. 331 pasan autos a despacho para dictar sentencia.


CONSIDERANDO:

Tal como vimos al relatar los escritos introductorios al proceso, la parte actora Asociación Ministerio Hijos del Altísimo, en su carácter de propietario del INSTITUTO CRISTIANO DE ENSEÑANZA PATAGÓNICO (en adelante ICEP), promueven acción de amparo contra el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y contra el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz, en contra de la decisión del citado Consejo Provincial de rechazar la solicitud de reconocimiento oficial del ICEP y disponer su clausura; decisiones adoptadas mediante Acuerdo N° 67/2017.

El accionante solicita, además, el dictado de una medida de no innovar que suspenda la aplicación del Acuerdo 67/2017, se deje sin efecto el mencionado Acuerdo, se otorgue reconocimiento definitivo al ICEP y restablezca la subvención estatal, cese de actos discriminatorio, respeto de principio de legalidad e igualdad y cese del hostigamiento.

Buena parte de la pretensión del amparista se funda en un supuesto incumplimiento, por parte del CPE, del Acuerdo Nro. 185/97, marco normativo del Régimen de Reconocimiento de los Institutos de Enseñanza de Gestión Privada.

Según el amparista, este marco normativo operaría con



cierto automatismo y le otorgaría al Instituto, luego de un cumplimiento original de los recaudos, derechos adquiridos. Dice el amparista que la solicitud de reconocimiento de nuevos institutos debe cumplimentar ciertos requisitos, cumplidos los cuales se otorga una autorización de funcionamiento por un año, prorrogable a dos y, luego -según esta interpretación- nacería un derecho al "reconocimiento oficial".

Pues bien, la cuestión en que incursiona el Acuerdo 067/2017 es precisamente si esos requisitos originales alguna vez fueron cumplidos. La posición del CPE es que, concretamente, muchos de esos requisitos, algunos referidos a importantes aspectos de seguridad del alumnado, tales como la reglamentación edilicia (por ejemplo, existencia de planos aprobados por la municipalidad), nunca fueron cumplidos.

Otro aspecto que se encuentra en cuestión es que si un eventual cumplimiento original de los requisitos que habilitaban el reconocimiento oficial (aspecto que no está probado) implica que la entidad se encuentra liberada del deber de mantener dicha regularidad reglamentaria en el tiempo. Parece razonable desde el punto de vista jurídico exigir que, aún cuando los recaudos, en algún momento desde el año 2008, se hubieran satisfecho, si la resolución del reconocimiento oficial se dilató, deban ser exigidos al momento en que, finalmente, esta cuestión (el reconocimiento) se trata.

La idea es que la satisfacción del principio de legalidad y el respecto de la integridad de los derechos de niños y adolescentes no puede verse perjudicada por supuestos derechos adquiridos que no surgen de ningún elemento normativo del sistema. Ninguna norma declara en esta materia la existencia de una adquisición de derechos por el transcurso del tiempo.

En definitiva, la cuestión central tratada por el Acuerdo 067/2017 es si actualmente el ICEP se encuentra en

condiciones de funcionar como establecimiento educativo.

La decisión de la autoridad competente (CPE) es negativa, fundada en una serie de requisitos que ya han sido enumerados; algunos de gravedad evidente, tales como la supuesta existencia de personal docente no registrado; obstrucción y resistencia a controles por parte del CPE; apertura de secciones sin autorización; y diversos problemas edilicios, entre los que se encuentra la cuestión a la existencia de planos habilitados.

La enumeración de fallas e incumplimientos que realiza el CPE no aparece en principio como arbitraria, ilegal o irrazonable; al menos no aparece así de modo "manifiesto". Todo lo contrario, existen en el expediente administrativo elementos de juicio y prueba que tienen la consistencia suficiente como para justificar la seriedad de lo decidido.

Debo enfatizar que los actos administrativos cuentan en su favor con una presunción de legitimidad y juridicidad.

Siendo que no existe un comportamiento manifiestamente arbitrario, abusivo, ilegal o persecutorio (tal como denuncia la amparista), la cuestión relativa al cumplimiento o no de los recaudos para la habilitación o reconocimiento del ICEP excede la vía procesal del amparo.

La acción de amparo, en el diseño del art. 43 de la C. Nacional, requiere, como adelanté, que la supuesta arbitrariedad o ilegalidad se presenten de algún modo como evidentes, manifiestos o, al menos, fáciles de discernir o probar.

En un caso de esta complejidad, con tantos elementos fácticos que requerirían de prueba y análisis puntual y separado, el proceso del amparo no parece la solución procesal recomendable. Por eso, la doctrina judicial ha entendido (supuesto incorporado en las viejas leyes de amparo) que no procede esta vía cuando el tema requiere

mayor complejidad de derecho o prueba.

El amparista dice que presentó la solicitud de reconocimiento en el año 2005, expediente Nro. 621.532-CPE-06 y recibió autorización para funcionar para el año 2007, con prórroga en el 2008. Agrega que ya para el año 2010 el CPE debía emitirse el reconocimiento definitivo a la Institución Educativa, sin embargo no se otorgó el mismo y se ejercieron actos dilatorios, obstructivos, de carácter doloso para no otorgar el reconocimiento definitivo hasta el día de la fecha.

Pues bien, estos supuestos actos obstructivos, dilatorios de carácter doloso no se encuentran probados. La producción de esa prueba requeriría una complejidad que excede, a mi juicio, el marco de este proceso.

Es por ello que debe rechazarse el pedido de producción de prueba efectuado por el amparista y la suerte de este proceso se decide con una declaración de su improcedencia formal.

Tal como señala el Estado Provincial "...la circunstancia de que la acción de amparo haya superado el examen de admisibilidad formal o sustancial previo, si luego se repara en la ausencia de presupuestos y condiciones esenciales correspondiente al amparo, cabe su rechazo al sentenciar..." (fr Rivas "El Amparo", La Rocca, 2da. págs. 273/274, Sent T XXX, R 160, Excma. Cámara de Apelaciones).

A lo expuesto, cabe agregar que no se encuentra justificada la demanda dirigida contra el Estado Provincial, lo que avala la defensa de falta de legitimación que esta autoridad plantea. Efectivamente, tanto la Constitución Provincial (en su art. 82) como la Ley Provincial 3305 establecen un sistema según el cual la materia educativa se encuentra administrada por una autoridad específica que se integra con una especial representación y tiene su propia mecánica

de funcionamiento.


En ese marco, contra un acuerdo dictado por el CPE, la autoridad legitimada en forma pasiva no es otra que el mismo Consejo Provincial de Educación, salvo que se acredite de modo específico una intervención en el caso concreto por parte del otros poderes del Estado; extremo que no se ha cumplido aquí.

Más allá de ello, la cuestión que define la suerte del proceso es, insisto, la no acreditación -siquiera provisoria y superficial- de los recaudos de procedencia formal de la acción.

Reitero que se evidencian en el Expediente 621.532/06 y se describen en el Acuerdo 067 una serie de deficiencias en el funcionamiento del ICEP que tienen la gravedad y verosimilitud que alejan la percepción de una posible arbitrariedad por parte el Consejo Provincial de Educación.

Recordemos que el CPE afirma que luego de otorgada la autorización de funcionamiento, la actora no ha cumplimentado los requisitos para su Reconocimiento Oficial. Incluso el CPE reconoce que la existencia de un "yerro" en la actuación de ese organismo no autoriza a tener, por ejemplo, por aprobado un plano que no lo estaba y por cumplidos recaudos que no estaban satisfechos.

No encuentro en la demanda interpuesta por la amparista una respuesta a algunos de los puntos que fundan el Acuerdo 067/2017. Por ejemplo, hay cuestiones tan serias como la afirmación de que una auditoría del 4 y 6 de octubre de 2017 detectó que de setenta secciones, treinta y ocho no cuentan con autorización (primario) y del nivel secundario cuatro de once tampoco poseen autorización; que "...se ha constatado el funcionamiento de un denominado "anexo" en la calle Berutti y Lavalle, el cual nunca ha sido autorizado por el Consejo de Educación pues no ha sido denunciado por el instituto en absoluto; que se ha podido constatar que existen docentes que cumplen funciones en



la institución y carecen de la debida inscripción; que la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Cruz se presenta en dos ocasiones a fin de realizar las inspecciones de su competencia siendo impedida por parte del Instituto; que "... el día 1º de diciembre del año 2017 padres del instituto denuncian actos vejatorios por parte del personal dependiente de la Institución o más bien, personal que no configura parte de la POF ni debió haber estado en contacto con los alumnos. Las autoridades o personal de la institución (...) de palpar y/o revisar a los niños y sus pertenencias..." (acciones que no habrían sido negadas por el Director del Nivel Primario, sino que habría alegado que se trataba de personal de la "iglesia", ajeno al Instituto).

Ante una argumentación tan concreta, la discusión en el ámbito del amparo sólo se justificaría si el amparista presenta de modo claro y evidente que se trata de circunstancias inexistentes, inventadas o fruto de manipulación de información. Nada de ello surge del escrito de demanda, al menos no con la claridad que debo exigir para abrir un proceso de estas características.

En definitiva, no estando cumplidos los recaudos para la procedencia formal de la acción de amparo (art. 43 C.N. y Ley 1117), he de declarar su inadmisibilidad formal, rechazando, en consecuencia la acción entablada y, por supuesto, la pretensión de producción de prueba.

Las costas se imponen a la parte actora, y la regulación de honorarios de los letrados intervinientes corresponde sea diferida hasta tanto den cumplimiento con la normativa previsional y tributaria vigente.-

Por todo ello;

FALLO:

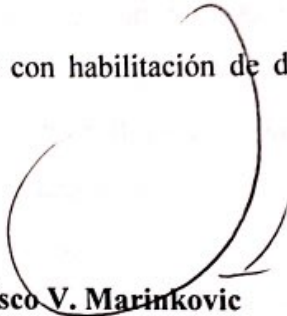
1.- Rechazar, en función de su evidente improcedencia

formal, la acción de amparo interpuesta por la Dra. Monica Sandra Cortes, en el carácter de apoderada de la Asociación Ministerio Hijos del Altísimo (propietario del **INSTITUTO CRISTIANO DE ENSEÑANZA PATAGÓNICO**), contra el Estado Provincial y el Consejo Provincial de Educación.

2.- Imponiendo las costas causídicas al accionante en los términos del art. 16 Ley 1117.

3.- Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto den cumplimiento con la normativa previsional y tributaria vigente.

4.- Regístrese y Notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles.



Francisco V. Marinkovic

Juez